
Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 27 de enero de 2004.
Materia: Penal.
Recurrente: Carlos Maleno Fundador.
Recurrida: Madelin E. González.

LAS SALAS REUNIDAS.

Extinción.

Audiencia pública del 17 de diciembre de 2020.
Preside: Luis Henry Molina.

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, las SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competentes para conocer del segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, presidida por el magistrado **Luis Henry Molina Peña** y demás jueces que suscriben, en fecha 17 de diciembre del 2020, año 177° de la Independencia y año 158° de la Restauración, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:

En ocasión del recurso de casación interpuesto por **Carlos Maleno Fundador**, dominicano, mayor de edad, soltero, chofer, cédula de identidad y electoral núm. 001-0774986-3, domiciliado y residente en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte, sector La Ciénega, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, entonces prevenido; **Melquiades Guerrero**, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, cédula de identidad y electoral núm. 016-0000203-2, domiciliado en la calle A, núm. 2, Urbanización Costa Verde, Prolongación Independencia, Distrito Nacional, persona civilmente responsable; y, **Seguros Popular C. por A.**, continuadora jurídica de la Universal de Seguros C por A., entidad aseguradora; contra la sentencia sin número dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 27 de enero de 2004.

VISTOS (AS):

El acta de recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte *a qua* el 31 de mayo de 2004 a requerimiento Melquiades Guerrero, Carlos Maleno Fundador y Seguros Popular C por A., continuadora jurídica de la Universal de Seguros C por A.

El dictamen emitido por el Procurador General de la República el 22 de febrero de 2005.

La audiencia para conocer el recurso de casación de que se trata fue celebrada el 15 de marzo de 2006.

Resulta que:

Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia conocieron el presente recurso de casación en la audiencia celebrada al efecto, ocasión en la que decidieron reservar el fallo para dictar sentencia en una fecha posterior; por tal razón, y en vista de encontrarse aún pendiente, el magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto núm. 20-2020, el cinco (5) de noviembre de 2020, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Pilar Jiménez Ortiz, Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Fran

Euclides Soto Sánchez, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Blas Rafael Fernández Gómez, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, Moisés Alfredo Ferrer Landrón, Samuel Amaury Arias Arzeno, Rafael Vásquez Goico, Justiniano Montero Montero, María Gerinelda Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco, para integrar las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes números 684 del año 1934 y 926 del año 1935.

Los jueces suscribientes se encuentran habilitados para pronunciar el fallo correspondiente al presente recurso de casación en virtud de que la audiencia se concentra en el debate sobre los fundamentos del recurso, y el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0099/17 del 15 de febrero de 2017 ha refrendado que el cambio de jueces en la corte de casación, para la deliberación y fallo del recurso, no constituye una violación al principio de inmediación en materia penal.

LAS SALAS REUNIDAS, LUEGO DE HABER DELIBERADO:

Del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que:

El Ministerio Público sometió a la acción de la justicia a Carlos Maleno Fundador, presuntamente por haber violado las disposiciones contenidas en la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, en perjuicio del señor Yanis Alberto Meléndez Tavárez (fallecido), por el hecho siguiente: *“En fecha 7 de marzo de 1994, ocurrió en la autopista Duarte, en el Kilómetro 32, tramo Santo Domingo-Villa Altigracia, una colisión entre un camión cabezote, propiedad de Melquiades Guerrero y asegurado con La Universal de Seguros, C por A., con un vehículo propiedad de Viamar, C por A., conducido por Yanis Alberto Meléndez Tavárez, en el que falleció este último, y ambos vehículos resultaron con grandes desperfectos”*.

Para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderada la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal, tribunal que el 5 de diciembre de 1995 dictó sentencia, en sus atribuciones correccionales, en la cual declaró culpable a Carlos Maleno Fundador, de violar los artículos 49 letra D y 65 de la Ley núm. 241, condenándolo al pago de una multa y costas penales, así como al pago de una indemnización de forma conjunta y solidaria con Melquiades Guerrero, a favor de Madelin E. González y María José Rasquin, como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por el presente caso, además del pago de las costas civiles, siendo la sentencia común, oponible y ejecutable a la compañía Universal de Seguros C.A.

No conformes con la anterior decisión, Melquiades Guerrero, Carlos Maleno Fundador y Universal de Seguros C por A., en sus respectivas calidades, así como la parte civil constituida Madeline González, interpusieron recurso de apelación, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, la cual dictó la sentencia núm. 607 de fecha 23 de septiembre de 1997, mediante la cual modificó los montos indemnizatorios fijados, confirmando en los demás aspectos la sentencia impugnada.

La sentencia antes citada fue recurrida en casación por el prevenido, la persona civilmente responsable y la entidad aseguradora, a propósito de lo cual la Cámara Penal Suprema Corte de Justicia pronunció sentencia el 8 de noviembre de 2000, por medio de la cual casó la recurrida por incurrir en violación a las reglas de la inmutabilidad del proceso, y ordenó el envío del asunto ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.

Apoderada del envío ordenado, la Corte *a qua* dictó la sentencia núm. 08-2004, del 27 de enero de 2004, siendo su parte dispositiva:

PRIMERO: Se pronuncia el defecto en contra del prevenido, Carlos Maleno Fundador y Melquiades Guerrero, persona civilmente responsable, por no haber comparecido, no obstante haber sido legalmente citados. SEGUNDO: Se declara regular y válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos: a) Por el prevenido Carlos Maleno Fundador, por la compañía Transporte Fernández, C Por A., y la compañía de seguros La Universal de Seguros, C por A., y b) por el Dr. José Ángel Ordoñez, a nombre y representación de María José Razquin Viuda Meléndez, madre y tutora legal de los menores Borja e Ibia Meléndez Razquin, contra la sentencia correccional No. 968, de fecha 5 de diciembre del año 1995, dictada

por la Segunda Cámara penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se copia en otra parte de la sentencia, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a derecho. TERCERO: En cuanto al fondo, esta Corte obrando por propia autoridad MODIFICA la sentencia objeto del presente recurso tanto en el aspecto penal como en el aspecto civil, y en consecuencia declara culpable al co-prevenido Carlos Maleno Fundador de generales que constan en el expediente, de violar los artículos 61 y 49 numeral 1ro. De la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, y por consiguiente le condena al pago de una multa de dos mil (RD\$2,000.00) pesos y al pago de las costas penales. CUARTO: Se declara extinguida la acción pública en cuanto al co-prevenido Yanis Alberto Meléndez Tavarez. QUINTO: Se declara regular y válido, en cuanto a la forma la constitución en parte civil, incoadas por las señoras Madelin E. González, en calidad de tutora legal, del menor Yanis Alberto Meléndez González y María José Razquin, en su calidad de tura legal de los menores Borja e Ibai Meléndez Razquin, hijos del occiso Yanis Alberto Meléndez Tavarez, fallecido a consecuencia del accidente, contra el co-prevenido Carlos Maleno Fundador y la persona civilmente responsable el Sr. Melquíades Guerrero, por haber sido interpuesta en tiempo hábil y conforme a derecho. SEXTO. En cuanto al fondo condena al co-prevenido Carlos Maleno Fundador, y a la persona civilmente responsable Melquíades Guerrero, al pago de una indemnización de cuatrocientos mil (RD\$400,000.00) pesos, en provecho del menor Yanis Alberto Meléndez González, representado por su madre Sra. Melendi E. González, y ochocientos mil (RD\$800,000.00) pesos a favor de los menores Borja e Ibai Meléndez Razquin, representados por su madre la Sra. María José Razquin, como justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados. SÉPTIMO: Se condena a Carlos Maleno Fundador, conjunta y solidariamente con Melquíades Guerrero, en sus calidades antes señaladas, al pago de los intereses legales de las sumas acordadas como indemnización principal, contado a partir de la demanda en justicia hasta la ejecución de la sentencia a título de indemnización complementaria y al pago de las costas civiles con distracción de las mismas, en provecho del Dr. José Ordoñez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. OCTAVO: Se declara la presente sentencia común y oponible en el aspecto civil, a la compañía de seguros La Popular C por A., continuadora jurídica de la Universal de Seguros, S.A., por esta la entidad aseguradora del camión cabezote envuelto en el accidente conducido por Carlos Maleno fundador (sic).

Consideraciones de hecho y de derecho:

Del histórico del caso que ocupa nuestra atención, resulta evidente que nos encontramos apoderados de un proceso correspondiente a la estructura liquidadora, pues la acción penal se contrae a un hecho acaecido en el año 1994, cuando se encontraba vigente el Código de Procedimiento Criminal, obrando en la glosa como primer acto procesal el acta levantada por la Policía Nacional en fecha 7 de marzo de 1994, dando inicio al presente proceso.

Por definición de la Ley núm. 278-04 sobre la implementación del proceso penal instituido por la Ley núm. 76-02, la presente es una causa en trámite y en liquidación, pues inició con el otrora Código de Procedimiento Criminal y la última actuación procesal consistió en la audiencia celebrada el 15 de marzo del año 2006. En este punto es importante observar que en la referida ley el legislador instauró un método de implementación y también de transición hacia el Código Procesal Penal, previendo la duración máxima de los procesos aún en curso al disponer lo siguiente:

Artículo 5. Duración del proceso. Las causas que, mediante la estructura liquidadora, deban continuar tramitándose de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884, por no estar sujetas a la extinción extraordinaria, deberán concluir en el plazo máximo de dos años, computables a partir del 27 de septiembre del 2004. Una vez vencido este plazo de dos años, las causas a las que se refiere este artículo que quedaren todavía pendientes dentro de la estructura liquidadora seguirán tramitándose de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el Artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto de partida, respecto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento.

Transcurridos todos estos plazos sin decisión irrevocable se declarará la extinción de la acción penal de las causas que quedaren pendientes dentro de la estructura liquidadora. Esta declaratoria tendrá lugar a

petición de las partes o de oficio por el Tribunal, aún cuando haya mediado actividad procesal.

Párrafo: Durante este período, cuyo total es de cinco (5) años, y durante el primer trimestre de cada año podrá procederse, si es necesario, con respecto a las causas aun pendientes dentro de la estructura liquidadora, de la manera establecida por el Artículo 3 de la presente ley para la extinción extraordinaria.

A la llegada de los primeros dos años de la etapa liquidadora, la Suprema Corte de Justicia, en interés de evitar que el tránsito de los procesos de un modelo al otro se produjera de forma traumática, así como de asegurar la uniformidad de las actuaciones con dicho fin, emitió la resolución núm. 2529-2006 del 31 de agosto de 2006, mediante la cual dispuso -respecto de las causas en trámite ante la Suprema Corte de Justicia en atribución liquidadora- que los aspectos de admisibilidad del recurso se regirían por la legislación vigente al momento de su interposición. Luego, aproximándose el término del plazo de duración máxima del proceso, previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que era de tres años antes de la modificación efectuada por la Ley núm. 10-15, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución núm. 2802-2009 del 25 de septiembre de 2009, en la que resaltó el interés judicial de observar la dualidad de plazos de duración máxima del proceso atendiendo a que en los casos complejos el vencimiento operaba a los cuatro años, y, por otro lado, inspirada en las motivaciones del legislador de la Ley núm. 278-04 al sostener que aunque la extinción dispuesta persigue descongestionar los tribunales penales no podía constituir una causal de impunidad sobre todo en casos de alta peligrosidad, declaró que *“la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”*.

Resulta evidente que aún con los procedimientos así regulados no fue posible concluir con la totalidad de asuntos pendientes y en trámite en el referido plazo de cinco años. Ante dicha realidad, este órgano está llamado a dar respuesta a las causas que en dicha situación les apodera, y para hacerlo debe someterse al principio de favorabilidad que rige en la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, como lo dispone el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución de la República; de igual manera, al principio de no retroactividad o irretroactividad de la ley que se consagra en el artículo 110 del mismo canon constitucional, que establece: *“La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”*.

En dicho orden, la principal cuestión que corresponde observar es la atinente a la prolongación en el tiempo sin que este proceso haya sido definitivamente resuelto, lo cual confronta el principio del plazo razonable previsto en el artículo 8 del Código Procesal Penal, que también se incluye dentro de las garantías mínimas que conforman el debido proceso. En esa tesitura, esta Suprema Corte de Justicia ha sido reiterativa en el sentido de que: *“El plazo razonable, es uno de los principios rectores del debido proceso penal, y establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho de presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad; principio refrendado por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en su artículo 69, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso; Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, tal y como ya se ha expresado, al momento de ocurrir los hechos, disponía que la duración máxima del proceso, específicamente que la duración máxima, de todo proceso es de tres (3) años; y que en el artículo 149 se dispone que, “Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este Código”; que de conformidad con la resolución núm. 2802-2009, del 25 de septiembre de*

2009, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al tribunal apoderado evaluar, en consecuencia, la actuación del imputado; que en la especie, conforme los documentos y piezas que obran en el expediente, se observa que no es atribuible al imputado”.

En el caso que nos ocupa, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia han comprobado que la inactividad procesal de los últimos catorce (14) años no es atribuible ni a los recurrentes ni a la parte recurrida, pues no ha mediado actuación alguna de su parte, por lo que procede declarar la extinción de la acción penal al amparo de las disposiciones normativas y la jurisprudencia casacional citada.

En atención a las circunstancias de hecho y derecho descritas, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, tomando en consideración las reglas procesales que conforman el debido proceso, el buen derecho y los principios legales antes citados, consideran que procede declarar oficiosamente la extinción de la acción penal por haber sido constatado de manera fehaciente que este proceso ha alcanzado una inactividad procesal de catorce (14) años, lo que sobrepasa a todas luces el plazo máximo de la duración del proceso establecido en la norma procesal penal, sin que de forma alguna pueda serle atribuible a las partes del proceso.

Finalmente, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal procede eximir a los recurrentes del pago de las costas generadas, en atención a la decisión que se adopta.

Por tales motivos, LAS SALAS REUNIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 821 de Organización Judicial y sus modificaciones; la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; la Ley núm. 278 sobre la Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02, el Código Procesal Penal de la República Dominicana; la Resolución núm. 2529-2006 del 31 de agosto del 2006, que reglamenta el tránsito de los procesos del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, y la Resolución núm. 2802-2009 que dispuso los criterios de evaluación previo al pronunciamiento de la extinción de la acción penal, ambas dictadas por la Suprema Corte de Justicia; y la sentencia número TC/0099/17 pronunciada por el Tribunal Constitucional el 15 de febrero de 2017.

FALLAN:

PRIMERO: Declaran extinguida la acción penal seguida en contra Melquiades Guerrero, Carlos Maleno Fundador y Seguros Popular C por A., continuadora

jurídica de la Universal de Seguros C por A, por las razones establecidas en el cuerpo de esta decisión.

SEGUNDO: Eximen a los recurrentes del pago de costas.

TERCERO: Ordenan que la presente sentencia sea publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.

Firmado: Luis Henry Molina Peña, Manuel Ramón Herrera Carbuccion, Pilar Jiménez Ortiz, Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Fran Euclides Soto Sánchez, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Blas Rafael Fernández Gómez, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, Moisés Alfredo Ferrer Landrón, Samuel Amaury Arias Arzeno, Rafael Vásquez Goico, Justiniano Montero Montero, María Gerinelda Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco. Cesar José García Lucas, Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y

publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.poderjudici